



JUZGADO PRIMERO (1) ADMINISTRATIVO TRANSITORIO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D. C.

SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D. C., 30 de noviembre de 2022

Expediente: 11001333501020220009400

Demandante: MILAGROS BUCHRRA KOTEICH KHATIB

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Procede el Despacho a pronunciarse sobre la legalidad de la conciliación extrajudicial celebrada por las partes aludidas el 22 de marzo de 2022, la cual se llevó a cabo en la Procuraduría 85 Judicial I para Asuntos Administrativos, teniendo en cuenta:

Que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo PCSJA22-11918 del 02 de febrero de 2022 creó tres (3) juzgados administrativos transitorios para la ciudad de Bogotá, los cuales tendrán a cargo los procesos sobre las reclamaciones salariales y prestacionales de la Rama Judicial y entidades con régimen similar, desde el 07 de febrero hasta el 06 de octubre de 2022.

Que el Consejo Superior de la Judicatura a través de Acuerdo PCSJA22-12001 de 03 de octubre de 2022, prorrogó las medidas transitorias creadas en el acuerdo anterior, hasta el 30 de noviembre del año en curso.

Que mediante Acuerdo No. 013 del 14 de febrero de 2022 fue designado Juez Primero Administrativo Transitorio el suscrito y debidamente posesionado con acta de posesión No. 46 de 2022 con efectos fiscales desde el 21 de febrero del presente año, por lo cual de conformidad con el oficio No. CSJBTO22-817 del 24 de febrero de 2022 del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, me corresponde conocer únicamente los procesos originados en los Juzgados Séptimo al Dieciocho Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá D.C.

ANTECEDENTES:

El apoderado de la parte demandante solicitó audiencia de conciliación el 20 de enero de 2022 ante la Procuraduría General de la Nación, en la cual convocó a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a fin de que le reliquidará y pagará la diferencia que por cesantías perciben los Congresistas de la República no considerados entre los emolumentos devengados por los Magistrados de las Altas Cortes y cuya incidencia corresponde en un 80% a lo devengado por el convocante a partir del 23 de julio de 2018, siendo admitida a través de auto de fecha 31 de enero de 2022, fijando como fecha para llevar acabo la diligencia el 22 de marzo de 2022.

Llegada la fecha y hora señaladas por la Procuradora 85 Judicial I para Asuntos Administrativos para llevar a cabo la audiencia de conciliación extrajudicial, y abierta la diligencia, la apoderada de la convocada presentó acta del comité nacional de defensa judicial

y conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en la que propusieron formula conciliatoria en los siguientes términos:

*(...) Se reconocerá y pagarán las diferencias salariales, teniendo en cuenta la incidencia de la prima especial percibida por los Magistrados de Altas Cortes, nivelada o reliquidada teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los Congresistas, **a partir del 22 de octubre de 2018 y hasta el 31 de julio de 2019** (respecto de los periodos reclamados con anterioridad al 14 de julio de 2018, ha operado la prescripción trienal, en razón a que la solicitud fue radicada el 14 de julio de 2021; y la fecha de corte es el 31 de julio de 2019, en virtud de la Circular DEAJC19-68, toda vez que la diferencia se empezó a pagar a partir de la nómina de agosto de 2019).*

2) Se reconocerá y pagará lo correspondiente al valor del 70% de la indexación (en cumplimiento de las Políticas de Conciliación establecidas en el Manual Técnico de Defensa Judicial y Conciliación de la Rama Judicial, adoptado mediante Resolución No. 0451 de 5 de febrero de 2021). Al realizar la liquidación correspondiente se efectuarán los descuentos de ley.

Así mismo, la convocada en la misma acta del comité de conciliación, luego de exponer la fórmula conciliatoria tenida en cuenta para la liquidación, indico:

*(...) Así las cosas, el valor total del acuerdo conciliatorio corresponde a **\$15.673.532, pagando el 70% de la indexación.***

De la anterior suma, se harán los descuentos de ley que sean a cargo del empleado

Expuesta la propuesta conciliatoria ante la parte convocante, la misma manifestó estar de acuerdo y aceptar la propuesta conciliatoria, llegando a un acuerdo conciliatorio por la suma de **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$15.673.532)**, pagando el 70% de la indexación y demás puntos expuestos por la convocada. En lo referente, la Procuraduría estimó que el acuerdo se ajustaba a derecho teniendo en cuenta que: (i) el arreglo contiene una obligación expresa, clara y exigible; (ii) reúne los requisitos legales de acuerdo a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes; (iii) no ha caducado el medio de control que potencialmente podría agotarse y; (iv) el acuerdo se basa en situaciones de estirpe económico sobre las que las partes tienen poder dispositivo, ya que las partes se encuentran debidamente identificadas y representadas y los documentos que se aportaron soportan en debida forma lo concertado.

Por consiguiente, la Procuraduría 85 Judicial I para Asuntos Administrativos dispuso el envío del acuerdo conciliatorio a los Juzgados Administrativos de Bogotá, para efectos de ejercer control de legalidad, de acuerdo al artículo 24 de la Ley 640 de 2001.

CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa

Advierte el Despacho que, mediante auto de fecha 31 de marzo de 2022 el Juez Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., se declaró impedido para conocer el

asunto en estudio fundamentado en la causal 1 del artículo 141 del Código General del Proceso.

En lo referente y como se indicó al inicio de esta providencia, se tiene que, este Despacho, Juzgado Primero Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá D.C., fue creado con la finalidad de tramitar y llevar a su fin los procesos sobre las reclamaciones salariales y prestacionales de la Rama Judicial y entidades con régimen similar. Oportunidad que permite determinar que, al tratarse la presente conciliación de una reclamación de la prima especial de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, es este Juzgador el competente para conocer del caso bajo estudio y por lo tanto aceptar el impedimento declarado por el Juez Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.

1. De la competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 640 de 2001, los Juzgados Administrativos son competentes para resolver de la aprobación o no de las conciliaciones extrajudiciales.

Así mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 156 y 157 de la norma *ibidem*, la competencia de este juzgado de primera instancia está determinada por los factores, tanto territorial, de cuantía, como subjetiva, al tener como demandado a una entidad pública como lo es la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2. De la conciliación

En lo referente, se tiene que el artículo 64 de la Ley 446 de 1998, ha indicado que, se trata de un mecanismo alternativo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador, quien al tenor del artículo 8º de la misma norma, debe velar porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los mínimos e intransigibles.

En concordancia, la Ley 640 de 2001 determina que la conciliación podrá ser judicial si se realiza dentro de un proceso judicial; o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial, así mismo indica que, se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación, como la aquí debatida.

A su turno, el Decreto 1716 de 2009 establece que en materia contencioso administrativa los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial se podrán conciliar, total o parcialmente, por conducto de apoderado sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como lo es, el mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendida con la solicitud de conciliación por el aquí demandante.

Ahora bien, cumplidos los anteriores presupuestos, para establecer si hay lugar o no a la aprobación del acuerdo conciliatorio bajo estudio, se requiere verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos, establecidos por el Consejo de Estado mediante sentencia

proferida en Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera de fecha 18 de julio de 2007 dentro del radicado No. 25000-23-26-000-2001-00072-01(31838):

i. Que no haya operado el fenómeno de la caducidad:

Analizado el caso bajo estudio, se observa que no procede la caducidad de la acción, toda vez que el demandante pretende la nulidad de la Resolución Nro. 0017 del 05 de enero de 2022, por medio del cual se niega la inclusión de la prima de compensación, en equivalencia al 80% de lo que por todo concepto perciben los Magistrados de Alta Corte, con inclusión de las Cesantías; acto que puede ser demandado en cualquier tiempo, al tratarse de un emolumento de carácter periódico, además de ser un acto producto del silencio administrativo de conformidad con lo establecido en el literal c del numeral 1 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

ii. Que el acuerdo conciliatorio se ocupe sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes.

En lo pertinente, una vez estudiado el acervo probatorio allegado al plenario, se observa que: (i) el acto administrativo Nro. 0017 del 05 de enero de 2022, por medio del cual se niega la inclusión de la prima de compensación, en equivalencia al 80% de lo que por todo concepto perciben los Magistrados de Alta Corte, con inclusión de las Cesantías, fue expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia, quien funge como parte convocada ; (ii) que el mismo va dirigido hacia la señora Milagros Buchrra Koteich Khatib, quien funge como convocante; los dos representados legalmente conforme a poderes conferidos, (iii) que las dos partes son los deliberadores de los derechos aquí discutidos, y (iv) que los derechos contenidos en el acto acusado le competen exclusivamente a la entidad empleadora y al empleado.

iii. Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar.

Revisado el plenario se evidencia que a folio 29 el Doctor Daniel Ricardo Sánchez Torres, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 80.761.375 y tarjeta profesional Nro. 165.362, se encuentra legalmente facultada por parte de la señora Milagros Buchrra Kateich Khatib para conciliar.

Así mismo, se evidencia a folio 39 la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial confirió poder en el que faculta a la Doctora Yadira Hernández Ramírez, identificada con cedula de ciudadanía Nro. 35.409.898 y tarjeta profesional Nro. 65.450 a conciliar.

iv. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público.

A. Por la parte convocante

- Poder especial visible a folio 29.
- Petición presentada en sede administrativa por el apoderado del demandante el 22 de octubre de 2021, visible a folio 13.

- Resolución Nro. 0017 del 05 de enero de 2022, por medio del cual se niega la inclusión de la prima de compensación, en equivalencia al 80% de lo que por todo concepto perciben los Magistrados de Alta Corte, con inclusión de las Cesantías, visible a folio 19.
- Solicitud de la conciliación extrajudicial de fecha 20 de enero de 2022, visible a folio 02.
- Acta de conciliación elevada el 22 de marzo de 2022 por la Procuraduría 85 Judicial I para Asuntos Administrativos, visible a folio 67.

B. Por la parte convocada

- Poder especial visible a folio 39.
- Acta del comité nacional de defensa judicial y conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial visible a folio 49.

3. De la prima especial como factor con carácter salarial:

Mediante la Ley 4ª de 1992, se señalaron las normas, objetivos y criterios que debía observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, que en su artículo 15, dispuso:

“Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios, sin carácter salarial, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere....” (La expresión subrayada fue declarada inexecutable por la Corte constitucional mediante sentencia C-681 de 2003).

Respecto a la interpretación que ha hecho de este conjunto normativo en sentencia del 04 de mayo de 2009, la Sección Segunda de esta Corporación expresó lo siguiente:

“De una lectura desprevenida, tanto del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, como de las disposiciones antes transcritas, es fácil deducir que las normas en comento se refirieron a ingresos laborales, de ahí, que no entiende la Sala la posición de la entidad demandada en pretender denegar el derecho con fundamento en que las cesantías son una prestación social y no un factor salarial, por cuanto como lo dice la norma, la prima especial de servicios debe ser igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por los miembros del Congreso y los que devenguen, para este caso en particular, los Magistrados de las altas cortes.

Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año percibe en ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si dicha partida es factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación social.

(...)

Ahora bien, los servidores indicados en el Decreto 10 de 1993, entre ellos los Magistrados de las Altas Cortes, tienen derecho a una “prima especial de servicios”, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso. Surge esencial, en consecuencia, aclarar que tratándose de la prima especial de servicios, regulada en el Decreto 10 de 1993 que desarrolló el artículo 15 de la Ley 4ª

de 1992, fue el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en la Ley 4ª de 1992 equiparó los derechos salariales de los de Magistrados de Alta Corte con los Congresistas, cosa que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, resultando entonces, que los ingresos laborales totales anuales de los Magistrados deben ser iguales a los ingresos laborales totales anuales de los Congresistas, por cuanto la Ley los ubicó en una misma situación de hecho, siendo necesario aclarar en este punto, lo siguiente:

La Ley 4ª de 1992, en su artículo 16, dispuso: La remuneración, prestaciones sociales y los demás derechos laborales de los Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y los Fiscales del Consejo de Estado serán idénticos.

La anterior disposición, es innegable, puso en un nivel de igualdad a los Magistrados de las altas cortes y los Fiscales del Consejo de Estado, en cuanto a remuneración, prestaciones sociales y demás derechos laborales, como lo expresa la entidad demandada. Sin embargo, no encuentra la Sala, que de ella se pueda deducir, como lo hizo la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que al ponerlos en tal situación, al mismo tiempo los diferenciara de los congresistas para efectos del señalamiento de la fijación de los ingresos laborales totales anuales.

Así mismo, el Consejo de Estado (Sentencia de Unificación del 02 de septiembre de 2019, C.P. Carmen Anaya De Castellanos, Expediente No. 41001233300020160004102, N.I. 2204-2018), precisó lo siguiente:

(...)” En el artículo 14 de la mencionada Ley el Congreso de la República creó una prima especial de servicios, en los siguientes términos:

El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1.) de enero de 1993(...).”

Por otro lado, en la misma providencia resolvió:

"(...)

- La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

- Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

- Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

- Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

*- Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
(...)”*

Aunado a lo anterior, la Sala de Conjuces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante Sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014) declaró la nulidad parcial de los decretos dictados por el Gobierno Nacional entre los años 1993 a 2007, mediante los cuales se había fijado en el 30% la prima especial creada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por haberla incluido dentro del salario básico de los servidores beneficiarios de la misma, en lugar de incrementarlo en ese porcentaje.

El mencionado fallo, consideró que los decretos expedidos anualmente, con el fin de reglamentar la previsión del 30% del salario denominada prima, no fueron claros, lo que conllevó a una interpretación errada por parte de las entidades encargadas de aplicarlos, toda vez que entendieron que dicho porcentaje hacía parte del salario, es decir, que el 100% de este e discriminaría así: 30% correspondía a prima y el 70% restante al salario; y no de la manera correcta que obedece a reconocer como prima especial el 30% del 100% del salario, en otras palabras, como un adicional al salario básico o asignación básica.

Precisado lo anterior, este despacho considera la aprobación al acuerdo conciliatorio llegado entre la señora **Milagros Buchrra Kateich Khatib** y la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, contenida en el acta suscrita el día 22 de marzo de 2022 en la Procuraduría 85 Judicial I para Asuntos Administrativos, por contar con las pruebas necesarias para el efecto y no advertirse ilegalidad en el mismo.

CASO EN CONCRETO.

De todo lo anterior, este operador Judicial concluye que, la presente actuación se ocasiona a partir del acuerdo conciliatorio allegado entre las partes en una cuantía estimada en **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$15.673.532)**, por concepto de la reliquidación las diferencias salariales, teniendo en cuenta la incidencia de la prima especial percibida por los Magistrados de Altas Cortes, estipulada en el artículo 15 Ley 4 de 1992, nivelada o reliquidada teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los Congresistas, arreglo que fue precedido por la Procuradora 85 Judicial I para Asuntos Administrativos y que consideró que estaban reunidas las condiciones legales para celebrar el acuerdo al que llegaron las partes además de que no resultaba lesivo para el patrimonio público.

Y finalmente, que el acuerdo conciliatorio analizado, se fundó en objeto y causa lícita, sin vicios en el consentimiento de las partes, y sin que con él se desconozcan los derechos irrenunciables del empleado, se lesionen los intereses del Estado, o se afecte el patrimonio económico de la entidad.

Por las razones expuestas, es procedente aprobar la conciliación extrajudicial celebrada entre las partes, por cuanto entre otras, se evita el desgaste procesal que finalmente

determinaría el pago de lo hoy reclamado, junto con otros aditamentos adicionales haciendo más gravosa la situación de la entidad, teniendo en cuenta que lo indicado por el Consejo de Estado y los tratados internacionales ratificados en Colombia.

En consecuencia, el suscrito **Juez Primero Administrativo Transitorio Del Circuito Judicial De Bogotá D.C.:**

RESUELVE:

PRIMERO: Aceptar el impedimento fundamentado por el Juez Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.

SEGUNDO: Avóquese conocimiento del proceso relacionado en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Apruébese el acuerdo conciliatorio, celebrado el **15 de diciembre de 2021**, ante Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá, entre el Doctor **Gabriel Antonio Ballesteros Pinilla**, identificado con la cédula de ciudadanía número **80.136.734** y la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

CUARTO: Esta Providencia y el Acuerdo Conciliatorio contenido en el Acta de conciliación del **15 de diciembre de 2021**, prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada material, de conformidad con la Ley.

QUINTO: Por Secretaría, a costa de las partes, expídanse copias del Acta de Conciliación y de la presente providencia, conforme a lo previsto en el artículo 114 del Código General del Proceso, con las constancias que sean del caso.

SEXTO: En firme este Auto, por Secretaría **Archívese** el expediente dejando las constancias a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RODRIGO JOSÉ ZABALETA BAÑOL

Juez

Angie V.

Firmado Por:

Rodrigo Jose Zabaleta Bañol

Juez

Juzgado Administrativo

001 Transitorio Sección Segunda

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3bcee3c143ba4b160fa853ad20d2410658919ddf856b4f3e55d13bd129f206f7**

Documento generado en 30/11/2022 10:28:16 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>